



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

Córdoba, 28 de octubre de 2020.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"DENUNCIADO: COMPAÑIA DE TRATAMIENTOS ECOLOGICOS S.A. (COTRECO) Y OTROS S/INFRACCION LEY 24.769 DENUNCIANTE: SINDICATO UNICO DE RECOLECTORES DE RESIDUOS Y BARRIDO DE CÓRDOBA (S.U.R.R.B.A.C) Y OTROS"** (Expte. N° 77139/2018/CA11), venidos a conocimiento de esta Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, en virtud de la presentación formulada por los señores abogados codefensores Dres. German Luis Gianotti y Facundo Cortes Olmedo, en representación del imputado Flavio Néstor Cavallieri, mediante la cual solicitan se declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Unidad de Información Financiera, Dr. Federico Bazzani (fs. 1743/1749 de autos).

Y CONSIDERANDO:

I.- Con fecha 23.07.2020 los señores abogados codefensores de Flavio Néstor Cavallieri, Dres. German Luis Gianotti y Facundo Cortes Olmedo presentaron un escrito solicitando que la Cámara Federal de Apelaciones declare mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Unidad de Información Financiera, Dr. Federico Bazzani (fs. 1743/1749 de autos), en los términos del art. 444 *in fine* del CPPN.

Los apelantes fundan su pretensión en que la resolución impugnada, en su punto **"IV REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIÓN"**, establece que los delitos que se les atribuyen a los imputados son los de: HECHO NUMERO 1: ASOCIACION ILICITA (art. 210, CP); HECHO NUMERO 2: INSOLVENCIA FISCAL FRAUDULENTA (art. 9 Régimen Penal Tributario, Ley 27.430); HECHOS NUMERO 3 AL 34: Apropiación Indebida de Recursos de la Seguridad Social (art. 7 Régimen Penal Tributario, Ley 27.430) y HECHOS NUMERO 35 AL 69

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

(art. 4, Régimen Penal Tributario, Ley 27.430) (v. auto a fs. 1130/1171).

Por consiguiente, sostienen que al formularse el requerimiento de instrucción no se ha realizado imputación alguna por el delito de lavado de activos del art. 303 del C.P. sin que esta situación haya variado hasta el momento. Este extremo constituye *per se* un impedimento a la admisión como querellante de la UIF., dado que carece de la condición de ofendido o damnificado por los delitos que integran el objeto procesal de la causa.

Sin embargo, llegada la causa a esta Instancia y habiendo articulado la UIF. recurso de apelación en contra de las faltas de mérito dispuestas por el señor Juez instructor (puntos XII y XIII según señala expresamente el libelo en cuestión), emerge -a su criterio- una manifiesta inadmisibilidad de la vía recursiva intentada que no ha sido advertida ni sancionada por el Juez de grado pero que, habiéndose elevado las actuaciones para su intervención, corresponde a la Cámara Federal de Apelaciones que lo declare mal concedido, en orden a las previsiones del art. 454 -primer párrafo- y art. 444 -segundo párrafo- de la ley ritual.

Al respecto, la defensa esgrime que la UIF. no puede ser considerada como ofendida penalmente por ninguno de los delitos que integran el objeto procesal de la causa y, especialmente, por aquellos incluidos en los puntos que apela (Puntos XII y XIII correspondientes a los hechos nominados N° 1 y N° 2), vale decir, carece de legitimación procesal.

En este sentido, sostienen que, sin perjuicio de que se le haya acordado participación en este proceso en carácter de querelante particular, no puede admitirse que ~~dicho Organismo "tenga derecho", en los términos del art.~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

444 del CPPN., a apelar los puntos del resolutorio que pretende impugnar, dado que carece manifiestamente de agravio, habida cuenta de la falta de interés directo, conforme la regla general del art. 432, 2° párrafo, del CPPN. Vale decir que no basta que la resolución sea apelable, sino que cada parte debe apelar en la medida de su interés.

Así, destacan que la pretensión punitiva que esgrime la UIF se encuentra delimitada y ceñida al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo -art. 303 y 306 del Código Penal-, ello conforme dispone la Ley N° 25.146 y sus normas reglamentarias, y no a otras figuras que son competencia de la acción penal pública o incluso de otras querellas particulares que participan de la causa esgrimiendo sus propias pretensiones punitivas.

Por tanto, admitir que el ofendido por un delito recurra o acuse por delitos que exceden la acción penal que está en condiciones de ejercer, le quitaría toda lógica y fundamento al instituto del querellante particular (conf. art. 82 y concordantes del CPPN), y constituiría -a su criterio- una grave afectación del derecho de defensa en juicio para los imputados, por violar *el principio de igualdad entre las partes o paridad de armas* exponiéndolo a acusaciones superpuestas y múltiples.

En definitiva, sostiene que la objeción procesal sobre la capacidad recursiva del querellante se asienta en criterios de reconocimiento de legitimación procesal subjetiva y que esta cuestión se encuentra normada en el Decreto 2226/2008 (23/12/2008) que el propio querellante habría invocado para fundar su solicitud de participación en la causa (fs. 704/718 de autos), de la cual resulta que la UIF puede intervenir como querellante en procesos penales, en relación al delito de lavado de activos y

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

financiación del terrorismo. Vale decir que la UIF. está autorizada a intervenir como querellante, sólo respecto de estos delitos, y cuando la gravedad del caso lo amerite (conf. considerandos del Decreto citado).

En este marco procesal, los defensores sostienen que es inadmisibile que la parte querellante UIF impugne una resolución en relación a figuras delictivas que exceden su legitimación subjetiva para impugnar, máxime cuando intervienen otros organismos públicos con competencias específicas, los cuales representan distintos intereses estatales que no pueden ser asumidos indistintamente por cada uno de ellos, en alusión a la participación como querellante en este proceso de la AFIP-DGI. Cita jurisprudencia, en particular, el fallo dictado en los autos: "*LOPEZ, JOSÉ FRANCISCO s/ recurso de casación*" por la Cámara Federal de Casación Penal, 09/02/2018, que habría admitido la participación de distintos organismos del Estado como querellantes en un proceso penal, pero limitados a sus intereses o competencias específicos.

En suma, plantean que la UIF carece de agravio para apelar la falta de mérito de delitos del régimen penal tributario o una asociación ilícita común y, en consecuencia, su recurso de apelación deviene inadmisibile, habiendo sido mal concedido por el *a-quo*, por lo cual solicitan que así sea declarado por esta Cámara Federal.

II.- De la petición formulada por la defensa técnica del imputado Flavio N. Cavallieri, se corrió vista a las demás partes intervinientes en esta Instancia recursiva (conf. proveídos de fs. 1772 y fs. 1791).

a) Los señores abogados defensores Dres. Benjamín Sonzini Astudillo y Mario C. Seleme, contestaron la vista conferida adhiriendo al planteo y petición de la defensa ~~técnica ejercida por los Dres. Gianotti y Cortes Olmedo,~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

efectuando similares consideraciones a las formuladas por los letrados peticionantes. Consideran que la Ley N° 25.246 no faculta a la UIF a entender en otras materias que no sean lavado de activos y/o financiación del terrorismo, hipótesis delictuales que no surgen de las constancias de autos ni fueron requeridas por el Ministerio Público Fiscal.

En este sentido, afirman que el legitimado procesal para impugnar el auto de mérito, además del Ministerio Público Fiscal, es la AFIP-DGI que ha consentido la resolución. Por estas razones, solicitan a esta Cámara Federal se declare mal concedido el recurso de apelación concedido a la querellante particular UIF.

b) En oposición, las partes querellantes AFIP-DGI, representada por los Dres. María Cecilia Villagra y Fernando Luis Farnochi, y la propia UIF., representada por la Dra. Marcela Adriana Vivona con el patrocinio letrado del Dr. Gabriel Gustavo Merola, contestaron la vista formulando reparos a la inadmisibilidad del recurso de apelación de este último, planteada por los defensores mencionados anteriormente.

Sobre la cuestión, la AFIP-DGI expresó que la Unidad de Información Financiera solicitó su participación en el proceso como parte querellante receptándose favorablemente por Juez de grado dentro de la causa, no habiéndose planteado en su oportunidad ninguna oposición. En su mérito, el Organismo recaudador consideró que la pretensión defensiva debe ser rechazada por extemporánea e improcedente, toda vez que habiéndose consentido la participación de la parte querellante dentro de proceso, no puede luego sostenerse la pretendida limitación para ejercer las facultades que le confiere el artículo 82 y ~~subsiguientes del CPPN.~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

Asimismo, manifestó que la afirmación defensiva de que la UIF. *"...carece manifiestamente de agravios..."*, no se corresponde con la formulación de expresa de los agravios que la resolución apelada le ocasionó a dicha parte querellante, efectuada al momento de presentar su recurso de apelación. Finalmente, formuló reservas de casación y del caso federal.

Por su parte, la apoderada de la Unidad de Información Financiera refirió, en primer término, que el planteo es extemporáneo pues ha sido consentida su incorporación al proceso en carácter de querellante y, en orden al principio de preclusión, corresponde que sea rechazado.

En segundo lugar, alegó que la resolución que le asignara ese rol (querellante) se dictó teniendo en cuenta la relación circunstanciada de los hechos formulada por la UIF conforme artículo 83 del CPPN., que delimitaba como "hechos precedentes del lavado de activos", justamente a los que forman parte de la apelación que motivara esta incidencia. Esta misma interpretación, sostiene la parte, fue formulada por el representante del Ministerio Público Fiscal y en tal sentido conforma el objeto procesal de la causa, de allí que la apelación de la UIF no puede sorprender a la defensa ni puede sostenerse válidamente que se trate de una "mera conjetura".

Asimismo, manifestó que independientemente de la calificación legal propuesta por el Fiscal en aquella etapa inicial, existía - y existe - una hipótesis de lavado de activos que enmarca aquellos hechos. Al respecto, afirma que es durante el proceso que corresponderá a las partes producir y controlar la prueba que demuestre o refute aquella hipótesis primigenia y no corresponde que por esta vía procesal se busque elípticamente dejar sin efecto resoluciones firmes.

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

En otro orden, como argumento subsidiario, sostuvo que la UIF. se encuentra facultada para intervenir como parte querellante no sólo en los casos de lavado de activos sino también en aquellos procesos en los que se investigan sus ilícitos precedentes. Ello así, toda vez que el "*ilícito penal precedente*" del cual provienen los bienes aplicados se encuentra contenido como parte del tipo penal previsto y reprimido en el art. 303 del Código Penal.

Asimismo, sostuvo que la defensa realizó una interpretación sesgada del artículo 6 de la Ley 25.246, considerando que tal interpretación persigue quitarle legitimación utilizando la norma que, justamente, atribuye interés legítimo a la UIF. en este presente proceso. Al respecto, indicó que el artículo 6° establece un listado -no taxativo- de ilícitos que resultan precedentes del lavado de activos entre los que se establece en el inciso j) los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario, es decir, tanto la asociación ilícita fiscal como la insolvencia fiscal fraudulenta.

Por último, manifestó que no resulta atendible el argumento de que la UIF carecería de legitimación para apelar la "falta de mérito" por el simple hecho de que otros querellantes no lo hayan hecho. En nuestra legislación, sostuvo, las querellas actúan de modo autónomo y no como "querellantes adhesivos" de otros acusadores. De allí que el planteo formulado por la defensa, a su entender, carezca de entidad para ser considerado como un argumento válido y atendible.

c) Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal, luego de sostener una contradicción en el argumento de la defensa en cuanto desde un comienzo consintió la intervención de la Unidad de Información Financiera y sin abundar en precisiones al respecto,

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

considera que corresponde a esta Cámara Federal el análisis de los requisitos de admisibilidad de los recursos de conformidad a las disposiciones del Libro 4, Capítulo 1 del CPPN., específicamente del artículo 444, de manera que se verifique la existencia de la impugnabilidad objetiva y subjetiva y la observancia de las formas establecidas.

III.- Sentadas y reseñadas en los párrafos precedentes las posturas asumidas por las partes, corresponde ingresar al examen de admisibilidad del recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera en contra de la resolución dictada con fecha 29.06.2020 por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, específicamente respecto los puntos dispositivos XII y XIII. A tal fin, se sigue el orden de votación establecido mediante sorteo informativo, correspondiendo expedirse en primer término a la Dra. Graciela S. Montesi, en segundo lugar, al Dr. Eduardo Ávalos y, por último, al Dr. Ignacio María Vélez Funes (conforme certificación actuarial obrante a fs. 1778).

La señora Juez de Cámara, Dra. Graciela S. Montesi, dijo:

I.- En virtud de lo peticionado por la defensa técnica del imputado Flavio Néstor Cavallieri en orden al juicio de admisibilidad formal del recurso de apelación deducido por la Unidad de Información Financiera, debo analizar si dicho Organismo, posee o no interés legítimo en la impugnación de la resolución de fecha 29 de junio de 2020, como condición previa al examen de procedibilidad del recurso.

Debo así introducirme en el examen de la observancia o no de los requisitos que la ley procesal ha establecido para la sustanciación y resolución de esta instancia recursiva, conformados por los presupuestos de impugnabilidad subjetiva y objetiva, tempestividad y formalidad (conf. art. 444 del CPPN.).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

Debo indicar que más allá de la petición de parte, corresponde que dicho examen de admisibilidad sea efectuado incluso de oficio (conf. art. 444 *in fine* del CPPN.). De tal modo, el planteo no resulta extemporáneo como ha sido esgrimido, sino que -por el contrario- el juicio de admisibilidad, oficioso o a petición de parte, se proyecta hasta el dictado mismo de la resolución del recurso.

En este sentido, se ha dicho que *"...El rechazo in limine de la impugnación puede provenir ex officio como primera resolución del ad quem o puede ser sugerido por las partes en la contestación de la impugnación o en ocasión de presentar breves notas luego de la audiencia prevista en el art. 468, anteúltimo párrafo"* (Gómez Urso Juan Facundo, Código Procesal Penal de la Nación, 1ª Edición, Hammurabi, año 2020, pág. 791).

Cabe, asimismo, resaltar que la participación acordada a la UIF como querellante en este proceso no integra el objeto de juicio de esta Instancia, motivo por el cual el presente pronunciamiento alcanza solamente la admisibilidad o inadmisibilidad de la apelación deducida por dicha parte.

Dicho ello, estimo pertinente mencionar que el recurso se presenta como el *"medio impugnativo por el cual la parte que se considera agraviada por una resolución judicial que estima injusta o ilegal, la ataca para provocar su eliminación o un nuevo examen de la cuestión resuelta y obtener otro pronunciamiento que le sea favorable"* (Clariá Olmedo, Jorge A., "Tratado de Derecho Procesal Penal, T. V., Ed. Ediar, Buenos Aires, 1960, pág. 442).

Conforme ello, el recurso aparece como una facultad de las partes para lograr la revisión de una determinada decisión jurisdiccional, sea por el mismo órgano que la dictó o sea por uno de jerarquía superior, según la clase

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

de recurso de que se trate. El principio general supedita dicha posibilidad a la concurrencia de dos requisitos: a) autorización expresa de la ley para hacerlo, salvo el caso de que, por no existir distinción entre ellas, todas las partes puedan recurrir (art. 432, CPPN); y b) la existencia de un interés directo o agravio (Maier, Julio - Bovino, Alberto - Díaz Cantón, Fernando, "Los recursos en el procedimiento penal", Ed. Del Puerto, 2ª edición, Bs. As., 2006).

Dentro de los recursos contemplados en nuestro sistema procesal, el recurso de apelación constituye el medio impugnación ordinario y amplio que permite la revisión de las resoluciones declaradas apelables o susceptibles de causar gravamen irreparable (art. 432 CPPN.), siempre que se encuentren satisfechos los requisitos de admisibilidad y fundabilidad. Respecto del primero, deben observarse las normas relativas a la legitimación subjetiva (art. 432, 434 a 437, *ibidem*), además de las condiciones de tiempo y forma (art. 438, CPPN.).

Ciertamente, el examen de la observancia de los requisitos formales de admisibilidad de los recursos, no puede entenderse como la adopción de criterios de excesivo rigorismo ritual. Lejos de ello, razones seguridad jurídica para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, obliga a establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole (Trabajadores Cesados Del Congreso (Aguado Alfaro y otros) v. Perú", sent. del 24 de noviembre de 2006 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y Costas), párr. 126, "Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", Pablo Larsen, Ed. Hammurabi).

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que *“si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales deben resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado”* (op. cit.).

Introduciéndome en las previsiones recursivas de nuestro Ordenamiento Procesal, debo señalar que, en el orden general, se desprende un criterio restrictivo del artículo 432 al disponer: *“Las resoluciones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos por la ley. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo. Cuando la ley no distinga entre las diversas partes, todas podrán recurrir”*.

Dicho criterio restrictivo se ve además plasmado en distintas normas del código, a través de las cuales se especifica las personas que pueden recurrir las distintas resoluciones dictadas durante el proceso.

Asimismo, la habilitación recursiva requiere la existencia de un interés en impugnar por parte del sujeto procesal que intenta atacar la decisión del órgano jurisdiccional. En otras palabras, debe existir *“agravio”*, es decir, la resolución atacada debe desmejorar o contradecir la expectativa de la parte frente a aquélla, lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer. Se trata, en definitiva, de un perjuicio que se ocasiona al interés de la parte. De ~~este modo, interés y perjuicio integran el concepto de~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

agravio, en donde el primero de ellos debe ser directo y el segundo objetivo y práctico.

Es del caso enfatizar que el art. 432 del CPPN. exige en materia de recursos la existencia de interés directo, ya sea en la revocación o bien en la modificación de la resolución atacada. Esta relación, *"presupone una discordancia entre lo resuelto y lo solicitado por el recurrente"* (Palacio, Los recursos en materia penal, p. 14, citado por Guillermo R. Navarro – Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. III, Ed. Hammurabi, 5ª edición). De esta forma, la viabilidad de la impugnación requiere la verificación de un perjuicio derivado de la resolución que se recurre, que debe permanecer vigente al momento de resolvérsela (CNCP, Sala IV, LL, 2000-F-898, referido por Navarro-Daray, autor y obra citada).

Al respecto, Goldschmidt sostiene que: *"todo recurso supone, como fundamento jurídico la existencia de un gravamen (perjuicio), de la parte, es decir una diferencia injustificada, desfavorable para ella entre su pretensión y la que le haya concedido la resolución que impugna"* (Parise - Dragone, "Teoría general de la impugnación", en Recursos ordinarios y extraordinarios en el régimen procesal penal de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, Arazi (dir.), 2005, p. 38).

II.- Expuesto lo anterior, cabe volver a remarcar que la cuestión que aquí se plantea se asienta precisamente en la supuesta carencia de interés directo por parte de la Unidad de Información Financiera respecto de la revocación o modificación de las decisiones por dicho Organismo impugnadas en el presente caso, lo que en definitiva impacta en su legitimación subjetiva para recurrir.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

Al respecto, corresponde indicar que aunque las partes estén investidas de la prerrogativa de impugnar, ello no basta por sí solo para abrir la instancia recursiva si no poseen interés directo en la solución que se pretende con la interposición del remedio procesal.

En torno al punto, la doctrina procesal moderna sostiene que: *"...el interés en materia de recursos está dado por la medida del agravio que causa la resolución a la parte que lo soporta. Así, debe relacionarse "...el agravio con la legitimación para impugnar, pues justamente quien, siendo parte en el proceso, considera que una providencia judicial le causa agravio, es quien puede impugnarla, en todo o en parte..."*. En este sentido, *"... para recurrir no basta ser parte, sino además demostrar poseer un agravio concreto, preciso y actual o actualizable; puesto que la ausencia de estas notas torna el pronunciamiento pretendido en inoficioso o inútil. La existencia de un interés a tutelar es indispensable para la deducción de cualquier tipo de recurso, tanto ordinario como extraordinario, pues las decisiones no se erigen como declaraciones abstractas acerca de los hechos y del derecho"* (Gómez Urso Juan Facundo, Código Procesal Penal de la Nación, 1ª Edición, Hammurabi, año 2020, pág. 765).

Ahora bien, analizando integralmente el plexo normativo aplicable al concreto, desde el Código Procesal Penal de la Nación, la Ley N° 25.246 de "Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. Unidad de Información Financiera" y los Decretos PEN 825/2011 y 2226/2008, como así también teniendo especialmente en consideración el objeto procesal fijado desde la promoción de acción penal y, en particular, la pretensión impugnativa de la Unidad de Información Financiera, estimo que la ~~apelación deducida por dicho Organismo~~ no reúne en el

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

presente caso los requisitos de admisibilidad formal, debiendo declarárselo mal concedido.

Recuérdese que la UIF apela el auto de fecha 29 de junio de 2020, puntualmente en lo referido a los puntos dispositivos XII y XIII, mediante los cuales se dispuso la falta de mérito de los imputados allí nombrados en orden a los delitos de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c de la Ley 24.769, actual Ley 27.430) e insolvencia fiscal fraudulenta (art. 9 Ley 27.430), respectivamente.

Cabe agregar, sin que implique adopción ni adelantamiento de criterio, que si bien en la pieza acusatoria se promovió acción por la figura de asociación ilícita en los términos del artículo 210 del CP. (hecho nominado primero), en otros delitos de carácter tributario, dicha calificación fue luego modificada por el Juez Instructor en la figura de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. c de la Ley 24.769, actual Ley 27.430). Asimismo, no surge del requerimiento de instrucción promoción de acción respecto al delito de lavado de activos de origen delictivo, más allá de su única inclusión como uno de los delitos indeterminados que habría tenido por destino cometer la asociación ilícita investigada.

Dicho ello y en torno a la controversia procesal señalada por la defensa sobre la capacidad recursiva de la Unidad de Información Financiera, debo decir que la normativa aplicable al concreto faculta a dicho Organismo a entender en relación al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, siendo estos -en definitiva- la medida de su interés en el proceso, más no así los demás delitos comprendidos por el Régimen Penal Tributario.

Hago hincapié en que los puntos dispositivos recurridos por la Unidad de Información Financiera ~~concernen a delitos específicamente~~ de carácter

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

tributario, encontrándose por tanto abarcados por la pretensión punitiva de la querellante particular AFIP-DGI y excediendo así la legitimación subjetiva de la UIF.

En este orden de ideas, cabe afirmar que mal podría considerarse la existencia de un gravamen irreparable nacido del dictado de una resolución en la que la materia de impugnación excede el objeto y facultades legalmente conferidos al Órgano impugnante y, por ende, no posee un derecho y una pretensión que pudieran considerarse afectados o perjudicados por los efectos del pronunciamiento.

Por otra parte, de acuerdo a los fundamentos expuestos por la Unidad de Información Financiera al contestar la vista que oportunamente le fuera corrida, cabe expresar que admitir su recurso con base en el argumento de que el delito por el cual se le ha atribuido legitimación procesal (lavado de activos, art. 303 del Código Penal) contempla la *"ilicitud precedente"*, llevaría al extremo de validar su legitimación activa y recursiva en todo supuesto sin restricción alguna, toda vez que cualquier delito de la legislación penal argentina podría constituirse, por caso, en delito precedente al lavado de activos.

En este punto resta agregar que la doctrina y jurisprudencia mayoritaria no exigen acreditación judicial del elemento *"ilícito precedente"*, sino tan sólo la verosimilitud de su existencia -incluso por vía indiciaria- como injusto penal, o bien, acción típicamente antijurídica. Por este motivo, no se advierte la necesidad de su participación en la presente instancia recursiva, pues una decisión adversa a las pretensiones aquí señaladas no impide de ningún modo la eventual imputación y avance de investigaciones en orden a la eventual comisión de delitos ~~de lavado de activos.~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

Asimismo, la intervención de la UIF en esta Instancia de revisión, junto a la participación en el proceso penal de AFIP-DGI, supone un desbalance irrazonable y desproporcionado en el equilibrio que debe existir entre los sujetos procesales involucrados: imputado, defensa y acusación.

En este sentido, el proceso acusatorio y adversarial debe ser respetuoso del derecho de defensa a la luz del principio de la "paridad de armas", en orden a la necesidad de un equilibrio cierto entre los acusadores y los imputados, máxime cuando los primeros son organismos estatales que ya se encuentran suficientemente representados. Ello exige la máxima prudencia en la admisibilidad de pretensiones que, como antes se dijo, detentan suficiente representación legal en el Organismo específicamente encargado de la querella por los delitos tributarios, cual es, la AFIP-DGI.

Insisto en que los delitos tributarios que aquí se ventilan encuentran suficiente representación en el Organismo específicamente encargado de la tarea de recaudación fiscal, el cual detenta en definitiva la legitimación subjetiva para recurrir por derivación de su interés directo y cierto.

En suma, considero que de conformidad a las situaciones procesales que pretende conmovir, la Unidad de Información Financiera carece en este caso particular y concreto de interés legítimo para recurrir el acto procesal dictado por el Juez de primera instancia, encontrando tales pretensiones representación específica en la querellante AFIP-DGI, además del Ministerio Público Fiscal.

En este orden de ideas, la presente vía no ha de prosperar al no superarse el primer examen de admisibilidad ~~formal, correspondiendo declarar mal concedido el recurso~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

de apelación interpuesto el Dr. Federico Bazzani, en representación de la Unidad de Información Financiera, de conformidad a los fundamentos expuestos y toda vez que carece de interés directo que habilite la instancia a los fines de corregir o enderezar una posible decisión agravante (art. 444 del CPPN). Sin costas (art. 530 y 531, CPPN). Así voto.-

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Ávalos, dijo:

Luego de examinar detenidamente las constancias de autos y las posiciones y razones esgrimidas por las partes, he de postular respetuosamente mi disidencia respecto de la solución adoptada por la señora Jueza de Cámara preopinante en orden a la corrección formal de la interposición del remedio impugnativo, toda vez que considero que el recurso de apelación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de parte querellante, resulta plenamente admisible y, por tanto, su concesión por parte del Juez Federal de primera instancia es ajustada a derecho.

En orden general, tengo para mí que el derecho al recurso constituye una de las más caras garantías convencionales. En efecto, de una interpretación conforme a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por el Estado argentino se desprende la necesidad de armonizar los preceptos reglamentarios del derecho al recurso con la exigencia de una hermenéutica que de mejor manera garantice su vigencia efectiva.

De tal suerte, corresponde asignarles a las disposiciones del Código de Procedimiento relativas a las formalidades requeridas para la concesión del recurso de apelación (recurso ordinario de carácter amplio), un significado compatible con la Constitución Nacional y las ~~Convenciones de Derechos Humanos~~. En este sentido, resulta

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

pertinente destacar la garantía a la doble instancia y el derecho al recurso (parte esencial del derecho al debido proceso penal y manifestación concreta del acceso a la justicia), contenida en las cláusulas 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros; constitucionalizados en la reforma operada en el año 1994, en virtud de lo dispuesto en el art. 75, inc. 22 de la CN.

Por su parte, debo decir que la CSJN en el precedente "Santillán" ha establecido que: *"(...) si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo, todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional, que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma"* (Fallos: 321:2021; el destacado me pertenece).

Asimismo, el Tribunal cimero señaló que lo arriba expuesto: "[es] en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance, como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617; 305:2150, entre otros), es coincidente con el que reconocen los arts. 8º, párrafo primero, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" (Fallos: 321:2021).





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

En esta inteligencia, a fin de resolver la cuestión suscitada, estimo que deben valorarse en forma conjunta las disposiciones que regulan la interposición de los recursos, a partir de la regla general prevista en el art. 432 del CPPN, y las normas que reglamentan la intervención, participación y actuación del querellante como un sujeto eventual, acusador particular, en el proceso penal. Si bien comparto criterio con la colega preopinante en cuanto a que el planteo formulado por la defensa no resulta formalmente extemporáneo, también considero que la participación acordada y consentida de la UIF en este proceso penal en carácter de querellante particular, con sus prerrogativas legales propias, no debe ser soslayada.

En punto a ello, el artículo 82 del CPPN establece que: "Toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública **tendrá derecho a constituirse en parte querellante y como tal** impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y **recurrir con los alcances que en este Código se establezcan**" (el destacado me pertenece).

En este sentido, asiste razón al querellante en cuanto expresa que la resolución que le asignara ese rol se dictó sobre la base de la relación circunstanciada de los hechos que formulara de conformidad al artículo 83 del CPPN; plataforma que delimitaba como hechos precedentes del lavado de activos aquellos que forman parte de la apelación interpuesta por la Unidad de Información Financiera. En una interpretación de la garantía al "doble conforme" a la luz de las reglas que gobiernan el proceso penal federal, en donde se establece expresamente el derecho a "(...) *recurrir con los alcances que en este Código se establezcan*" (conf. arts. 82 del CPPN), cabe señalar que la resolución que ~~dispuso la "falta de mérito" respecto~~ de los hechos que

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

dieron lugar a su admisión al proceso como querellante particular, constituye una decisión inmanentemente contraria a los intereses de dicha parte, con prescindencia de que además resulta expresamente apelable.

Sobre este último aspecto, el artículo 311 del CPPN prevé: "Los autos de procesamiento y de falta de mérito, podrán ser revocados y reformados de oficio durante la instrucción. Contra ellos sólo podrá interponerse apelación sin efecto suspensivo; del primero, por el imputado o el ministerio público; del segundo, por este último y el querellante particular".

Si bien debe resolverse sobre la existencia o no de interés directo para recurrir, mal podría prescindirse en su análisis de su calidad de querellante acordada en el presente proceso penal en función del objeto procesal delimitado en la requisitoria de instrucción, que da cuenta -respecto de estos hechos- de su carácter de ofendido penalmente y, consiguientemente, de su legítimo interés en este proceso respecto de estos hechos. Admitir su intervención en el carácter invocado, pero luego negarle interés en la revocación, modificación, integración o eliminación del acto procesal que define la situación procesal de los imputados respecto de los hechos que dieron lugar a su intervención, representaría vaciar de contenido su participación en el proceso vedando una de sus principales prerrogativas, cual es la impugnación para la revisión de las resoluciones.

Por otra parte, reza el art. 432 del rito, respecto de la impugnabilidad subjetiva, que: "... El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente acordado, siempre que tuviere un interés directo", ya sea en la revocación o bien en la modificación de la resolución atacada y que esta relación, "presupone una discordancia

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

entre lo resuelto y lo solicitado por el recurrente"
(Palacio, Los recursos en materia penal, p. 14, citado por Guillermo R. Navarro – Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. III, Ed. Hammurabi, 5ª edición). Frente a ello, en primer lugar, cabe referir que el código procesal penal le acuerda al querellante particular el derecho a recurrir el auto de falta de mérito.

De esta forma, la existencia o no de interés directo debe analizarse en relación a las pretensiones esgrimidas por la parte y al sentido -contrario o no- de la resolución dictada, resultando indispensable indagar en las posiciones asumidas previo al dictado de la resolución cuestionada. Ahora bien, en el caso de autos el interés legítimo en la impugnación del interlocutorio se encuentra patentizado en la pretensión acusatoria de la querellante plasmada desde su primera intervención en el proceso, en el escrito de instancia de parte. No obstante, también ha sido expuesta en el propio escrito recursivo en el que señaló como segundo agravio el hecho de "circunscribir la asociación ilícita investigada en autos a la materia tributaria se pasan por alto los graves indicios existentes en autos en relación con **el lavado de activos de origen ilícito**" (Sic).

A mayor abundamiento, la querellante apelante expresó: "el fiscal desde el inicio de la investigación tuvo en miras que **nos hallamos ante maniobras complejas, que comprenden no solo delitos tributarios sino también otras figuras graves que cuentan con autonomía y entre las que se cuentan las maniobras que conforman el núcleo central - aunque no único - del interés de esta Unidad en el avance de la presente causa: complejas maniobras de lavado de activos que habrían implicado millonarias aplicaciones de ~~dinero en el sistema legal con el objetivo de darles~~**

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

apariencia de licitud. En tal sentido, con posterioridad a aquel requerimiento, **esta UIF formuló su presentación como parte querellante dando cuenta que muchos de los hechos descriptos por el fiscal podrían ser -a su vez- hechos precedentes del lavado de activos de origen ilícito"** (Sic).

En suma, el apelante señala como motivo de agravio en su escrito de interposición del recurso, tanto el dictado de falta de mérito por delitos tributarios como la omisión de procesamiento por asociación ilícita prevista en el art. 210 del Código Penal, al excluir entre los delitos indeterminados que habrían signado su conformación, el lavado de activos de origen ilícito; ambas pretensiones íntimamente vinculadas al objeto procesal que legitima su actuación en la presente.

Es justamente la decisión del Juez respecto de la acreditación de extremos de la imputación y su calificación jurídica -al no contemplar la hipótesis de lavado como finalidad delictiva de la asociación criminal-, la que se erige en agravio para el querellante y se presenta como pretensión recursiva, surgiendo con evidencia su interés en la modificación de los términos del procesamiento dispuesto.

En efecto, el requerimiento fiscal de instrucción -acto formal promotor de la acción penal- (art. 188, CPPN), establece como hecho nominado primero: "Desde fecha no determinada con exactitud, pero que se podría establecer en el día 30 de noviembre de 2010 hasta el presente, Horacio Fabián Busso, Marcelo Elvio Debernardo y Flavio Néstor Cavallieri habrían organizado una asociación destinada a cometer delitos, entre ellos, evasión impositiva, apropiación de recursos de la seguridad social, apropiación de tributos, insolvencia fiscal fraudulenta, quiebra fraudulenta; lavado de activos y otros delitos derivados de

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

la actividad que se describirá más abajo ..." (el destacado me pertenece).

Así, luego de concedida la participación impetrada y notificada del auto en crisis, la UIF ejerció los derechos que le son propios, en el caso, impugnar dicho acto jurisdiccional durante el término de tres días previsto por la ley procesal. En este sentido, si bien la valoración de la existencia de interés directo en el querellante para conmovier la falta de mérito dictada debe hacerse en el caso concreto (relacionando el agravio y la legitimación para impugnar), lo cierto es que el legislador, al declararla expresamente apelable, ha entendido que una decisión de tal naturaleza es susceptible de causar agravio al querellante y, en principio, su concesión sería procedente.

De pura lógica se desprende que si la Unidad de Información Financiera fue admitido al proceso al ser considerado "ofendido penalmente" -legitimándose para ejercer los derechos acordados al acusador privado-, con motivo de las conductas descriptas en el requerimiento de instrucción que fijó las bases del objeto procesal -sin perjuicio de la subsunción legal, esencialmente modificable-, difícilmente la resolución intermedia que decide sobre el mérito provisorio para resolver la situación procesal de los imputados puede no ser susceptible de agravio e interés directo, presupuesto formal de la impugnación.

Al respecto, la jurisprudencia ha entendido que "la invocación del bien jurídico protegido para determinar la legitimación procesal activa no resulta una pauta definitoria, puesto que no se ha de excluir la protección subsidiaria de otros bienes garantidos; siempre que derive un perjuicio directo y real, quien lo sufre se encuentra ~~legitimado para ejercer el rol de querellante~~" y que no

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

corresponde excluir a aquellos bienes que podrían encontrarse garantizados en forma secundaria o subsidiaria en aquellos casos en los que el accionante no coincide con el titular del bien jurídico afectado por el delito (ver comentario al art. 82, Código Procesal Penal de la Nación Anotado - Comentado - Concordado por Nicolás F. D'Albora, Tomo I, Séptima edición corregida, págs. 199 y ss - Lexis Nexis).

Por otro lado, en cuanto a sus facultades, la ley 25.246 crea a la Unidad de Información Financiera en su art. 5° y que en el art. 6° establece que sus funciones concretas son el análisis, tratamiento y transmisión de información a efectos de impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, ello complementado por el art. 13 que establece que es su competencia recibir, solicitar y archivar informaciones suministradas por sujetos obligados, los que solo podrán ser utilizados en una investigación en curso, disponer y dirigir el análisis de los actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo y en su caso poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del ministerio público fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes, y colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos que reprime esa ley.

Cabe reiterar que el artículo 13 de la Ley 25.246 prevé como competencia de la Unidad de Información Financiera: (...) 3. Colaborar con los órganos judiciales y del Ministerio Público Fiscal en la persecución penal de los delitos reprimidos por esta Ley, de acuerdo a las pautas que se establezcan reglamentariamente (Inciso sustituido por art. 9° de la Ley N° 27.446, B.O.

18/06/2018).

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

Esta cuestión, se encuentra regulada en el Decreto 2226/2008 (23/12/2008) de la cual resulta que la UIF puede intervenir como querellante en procesos penales en relación al delito de lavado de activos y financiación del terrorismo. En efecto, el artículo 1 de dicho Decreto establece: *"Autorízase a la titular de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue **la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias**, en aquellos casos que así lo ameriten"* (el destacado me pertenece).

De este modo, los delitos previstos por la ley de creación de la Unidad de Información Financiera se circunscriben a las figuras incluidas en los artículos 303 y 306 del Código Penal argentino, esto es, lavado de activos de origen ilícito y financiación de actividades terroristas. No obstante, la jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal -en gran medida reseñada por la querellante en su escrito- ha considerado ofendido penalmente a la UIF en aquellos procesos penales cuyo objeto procesal se encontrase incluido en los ilícitos que la repartición estatal en cuestión está **legalmente llamada a prevenir** y que se encuentran mencionados en el art. 6 de la Ley 25.246.

En lo que aquí interesa, el artículo referido reza: "La Unidad de Información Financiera (UIF) será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir: d) Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para cometer delitos por fines políticos o raciales; j) Delitos previstos en la ley 24.769.

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

En este sentido, debe señalarse que a fin de juzgar la existencia de interés legítimo no resulta una pauta definitoria la ubicación sistemática de las normas penales infringidas a partir de la distinta intervención en pasos que, en definitiva, podrían configurar tramos de complejo criminal más amplio. En efecto, la subsunción jurídica de los hechos, por su esencial revocabilidad y provisoriedad, no conforman excluyentemente las bases de intervención de los sujetos en el proceso, sino que deben apreciarse los hechos fijados -que determinan el objeto procesal de esta etapa inicial de investigación- para decidir si encuentran vinculación o no con las pretensiones que válidamente pueden esgrimir las partes durante el proceso.

Ahora bien, la cuestión suscitada respecto de la legitimación procesal para intervenir en esta Instancia, ha tenido debida resolución en la jurisprudencia nacional, ya sea respecto de la posibilidad de la Unidad de Información Financiera de revestir el rol de querellante en procesos de investigación de delitos de lavado o financiamiento del terrorismo, o estrechamente vinculados a ellos o, en su caso, al mantenimiento de tal carácter en él.

La jurisprudencia ha admitido a la UIF como querellante invocando expresamente su capacidad para recurrir las decisiones de los órganos jurisdiccionales, en casos tales como enriquecimientos ilícitos o defraudaciones a la administración pública, entre otros, en los que se vislumbra interés por estar comprendidos en algunos de los supuestos previstos en el art. 6 de la ley (delitos que se quieren impedir o prevenir), o aquellos delitos que fuesen base del delito de lavado en cuanto "ilícitos precedentes". En este sentido, aun cuando la asociación ilícita que ha sido motivo de apelación no tendría finalidad política o

~~racia~~, la parte cuestiona la existencia de finalidades de

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

lavado de activo de origen delictivo originadas, por otra parte, en el producido de los delitos tributarios que por cierto se encuentran expresamente incluidos en el inc. j) del artículo 6 de la mentada ley.

En definitiva, el artículo 6° establece un listado de ilícitos que resultan precedentes del lavado de activos entre los que se establece en el inciso j) los delitos previstos en el Régimen Penal Tributario, es decir, tanto la asociación ilícita fiscal como la insolvencia fiscal fraudulenta que han sido motivo de apelación por parte de la UIF en su carácter de querellante.

En consonancia con lo expuesto, resulta estimable que la Cámara Federal de Casación Penal, en autos "García Moritan", sostuvo que: *"... la ley N° 17.516 regla la facultad de ser querellante del estado nacional ya que, como persona jurídica, tiene la capacidad de estar en juicio y constituirse como tal. Esto es así, a partir de lo dispuesto en el artículo 10 de la mencionada norma, en cuanto establece que: 'Salvo los casos en que por ley se autorice un régimen especial, el Estado Nacional y sus entes descentralizados serán representados y patrocinados ante los tribunales judiciales Y organismos jurisdicciones y administrativos, nacionales o locales: a) en Capital Federal, por los letrados dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos Ministerios, Secretarías de Estado, reparticiones o entes descentralizados...'. En esa misma línea, en su artículo 4° dispone que: 'El Estado podrá asumir el carácter de parte o querellante en todos los casos en que esté comprometido el orden público o el interés público, y particularmente cuando se cometan delitos contra la seguridad de la Nación, los poderes públicos y el orden constitucional...'. Luego se determinó que: ~~"La ley n° 25.246 -modificada por ley n°~~*

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

26.683- en su art. 6° establece que la Unidad de Información Financiera será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir, por un lado, el delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal). Así, se enuncian una serie de tipos penales de los que 'preferentemente' podrían provenir esos activos, entre los que se encuentran los delitos contra la administración pública previstos en los capítulos VI, VII, IX y IX bis del título XI del Libro Segundo del Código Penal, entre otros. Por otro lado la ley prevé capacidad para actuar en el delito de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal)".

Asimismo, se sostuvo que "...la capacidad para querellar fue otorgada expresamente por el decreto P.E.N. n° 2226/08 que reza: 'Autorizase a la titular de la Unidad de Información Financiera a intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados por la Ley N° 25.246 y modificatorias, en aquellos casos que así lo ameriten. (...) el decreto que reglamenta la potestad para querellar contempló cierta amplitud en cuanto a los casos en que la UIF podrá reclamar dicho rol".

Por último, se afirmó que: "... no obstante su autonomía, que el encubrimiento tiene una relación directa con el delito previo, tanto que no puede imaginarse una conducta encubridora sin que exista en realidad un delito principal que resulte encubierto', tanto como que: 'Al referirse al delito de receptación, [se] subraya que se trata de una figura jurídico penal plenamente autónoma e independiente del delito principal. Ello es así, [...] porque el delito que comete el receptor es distinto de ~~aquel que ha realizado el autor del delito principal~~, ya

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

que entre la receptación y el delito precedente no existe una conexión interna, sino sólo una relación externa...'

En definitiva, esas observaciones llevaron a establecer que: **"...este vínculo externo entre los ilícitos en trato -lavado de dinero y enriquecimiento ilícito- permite justificar el legítimo interés de la Unidad de Información Financiera para querellar en la presente, pues el conocimiento específico en la materia y las herramientas de investigación a su alcance podrían contribuir a la obtención de la verdad real, en particular respecto de delitos que afectan al sistema financiero y económico que, como en la especie, presuntamente incluye formas comisivas que comprometen a la administración pública, donde no deben limitarse recursos que podrían mejorar y facilitar la pesquisa. De tal suerte, el mero acceso que podría tener la UIF a la causa donde se investiga el enriquecimiento ilícito no sería suficiente, pues se le debe brindar la potestad procesal que permite instituir la como parte (art. 82 CPPN), de forma tal que pueda promover el avance de dicho proceso y así también, aunque en forma indirecta, contribuir al desarrollo de la investigación propia del delito de lavado de activos"** (el destacado me pertenece).

Tal intervención tiene fundamento en la obligación del Estado Argentino de cumplir con los compromisos internacionales asumidos mediante la aprobación de distintos tratados internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos.

Finalmente, cabe mencionar *mutatis mutandi* que se ha admitido el carácter de damnificado de AFIP-DGI por el funcionamiento de una organización dedicada al lavado de activos de origen ilícito que, muchas veces, comprendía la ~~índole tributaria. Así, se sostuvo que la investigación de~~

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414

esta organización, al tener ligada vinculación con la comisión de delitos tributarios y/o su posterior encubrimiento, acreditaban el interés de la AFIP para constituirse en parte en ese proceso, y que no resulta óbice a tal fin la ubicación sistemática de las normas penales infringidas a partir de una distinta intervención en pasos que, en definitiva, son parte de un único plan criminal (fallo del 8.08.2012 en autos: "BNP Paribas"; citado por Rodríguez Oliva, citado por María L. Rodríguez Oliva en "X Jornadas de Derecho Penal Tributario, 1ª ed., Ed. Errepar, Buenos Aires: AAEF, pág. 222)

Por todo lo expuesto, corresponde declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto por la mandataria de la Unidad de Información Financiera en su carácter de querellante particular en contra de la resolución dictada con fecha 29 de junio de 2020 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, sin que la presente implique pronunciamiento en algún sentido sobre la pretensión de fondo sostenida por la recurrente (art.444 del CPPN). Sin costas (conf. art. 530 y 531, CPPN). Así voto.-

El señor Juez de Cámara doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

Adhiero a la solución propiciada por el señor Juez de Cámara Dr. Eduardo Avalos, por cuanto considero que me encuentro habilitado para la función jurisdiccional toda vez que la recusación fue desestimada y el recurso de casación deducido contra ese decisorio no tiene efectos suspensivos y tampoco existe hoy decisión al respecto.

En virtud de lo expuesto,

SE RESUELVE:

Por mayoría,

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CÁMARA

Firmado(ante mí) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
FCB 77139/2018/CA11

I.- Declarar formalmente admisible el recurso de apelación interpuesto por la mandataria de la Unidad de Información Financiera en su carácter de querellante particular en contra de la resolución dictada con fecha 29 de junio de 2020 por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba, por las razones dadas y los alcances que se fijan (art.444 del CPPN).

II.- Sin costas (conf. arts. 530 y 531 del CPPN.).

III.- Regístrese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y continúe la causa según su estado.

GRACIELA MONTESI
Juez de Cámara
en disidencia

EDUARDO ÁVALOS
Juez de Cámara

IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES
Juez de Cámara

CELINA LAJE
Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 28/10/2020

Alta en sistema: 02/11/2020

Firmado por: EDUARDO ÁVALOS, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: IGNACIO MARÍA VÉLEZ FUNES, JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA

Firmado(ante mi) por: CELINA LAJE ANAYA, Secretaria de Cámara



#32620302#264865645#20201028130833414